



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto, según indica su artículo 1.1, la regulación de los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos, creado por el artículo 15 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuyo apartado 1 dispone “a los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él, se podrán hacer constar las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes”, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Ley 11/2007 dispone que “las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación”.

De este modo, el Proyecto sometido a informe regula la titularidad del registro, el procedimiento para la incorporación de los apoderamientos al mismo, con especial referencia a los supuestos en los que dicho apoderamiento requiera la confirmación explícita del apoderado y el alcance que podrán revestir los apoderamientos.

Respecto del Registro, el artículo 7 establece el régimen de adhesión al mismo de los correspondientes departamentos ministeriales, con indicación en cada caso de los supuestos para los que el apoderamiento será posible, así como su contenido. En relación con éste último, el registro incorporará, según el artículo 8, los datos de nombre y apellidos o denominación o razón social y NIF de poderdante y apoderado, así como los trámites y actuaciones o categorías de las mismas a las que se extiende el poder, su período de vigencia, y fecha de otorgamiento y de alta en el Registro, recogiendo el artículo 9 los supuestos y procedimientos de cancelación de los datos como consecuencia de la renuncia o revocación del apoderamiento.

Los artículos 10 y 11 regulan los accesos al registro, debiendo a tal efecto recordarse que el artículo 15.1 del Real Decreto 1671/2009 establece el carácter no público del Registro y que el artículo 15.3 de la misma norma establece que “El registro de apoderamientos permitirá a los Ministerios y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que se suscriban al mismo, comprobar la representación que ostentan quienes actúen electrónicamente ante ellos en nombre de terceros”.

De este modo, conforme al artículo 10 únicamente podrán consultar el registro los propios ciudadanos y respecto de los apoderamientos en los que ostenten la condición de poderdante o apoderado, de conformidad, según se indica, con el artículo 35 de la Ley 30/1992, pudiendo además considerarse tal acceso como una modalidad del derecho de acceso reconocido por el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999.

En cuanto a los accesos en el marco de la Administración General del Estado, se prevé que el mismo podrá tener lugar mediante la descarga de los apoderamientos vigentes para los trámites y actuaciones de las que el peticionario sea competente o mediante el acceso en línea al contenido del Registro, que parece igualmente limitado a los apoderamientos que conciernan al Departamento que consulte el Registro, si bien sería conveniente especificar esta circunstancia en el texto sometido a informe.

Desde el punto de vista de la legitimación para el tratamiento de los datos, tanto el consistente en la inclusión de los datos en el Registro como el resultante de su cesión a otros órganos de la Administración General del Estado, el artículo 13 del Proyecto sometido a informe prevé expresamente que cuando el poderdante o el apoderado sean personas físicas deberá constar el consentimiento al tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del Registro.

A tal efecto, en el modelo de formulario contenido en el Anexo I del Proyecto se incluye una cláusula según la cual “el poderdante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los exclusivos



efectos de los trámites y actuaciones por medios electrónicos objeto de representación”.

Sin perjuicio de que esta cláusula pueda considerarse adecuada, debe tenerse en cuenta que el Proyecto se refiere al consentimiento tanto del poderdante como del apoderado, por lo que será preciso que se estableciese una cláusula para el apoderado al menos en los supuestos en los que se produzca la aceptación del poder a la que se refiere el artículo 4 del Proyecto.

Al propio tiempo, la cláusula incluida en el formulario debiera completarse con la información exigida por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, debiendo tenerse en cuenta que del contenido de esa información mínima no se estaría haciendo referencia en la cláusula incluida en el formulario a la delimitación del responsable del fichero, los posibles destinatarios de los datos y el modo de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En consecuencia, debería hacerse mención de estos extremos bien en la cláusula bien en otro lugar del formulario.

Por último, el artículo 14 se refiere a la creación del fichero derivado de la creación del Registro, incluyéndose en el Anexo IV la delimitación del contenido del mismo exigida por los artículos 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y 54 de su reglamento de desarrollo. En relación con este punto, el citado Anexo IV da pleno cumplimiento a lo establecido en las normas citadas, debiendo ser informado favorablemente.